

El proceso de tutela de derechos fundamentales como medio adecuado para impugnar la sanción impuesta por un sindicato a uno de sus afiliados.

[BIB 2008\497](#)

Yolanda Maneiro Vázquez.

Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Santiago de Compostela

Publicación: Revista Doctrinal Aranzadi Social paraf.num.3/20081/2008 parte Presentación

Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2008.

I. Introducción

En cumplimiento del mandato recogido por el [art. 53.2 CE](#), la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas por los Tribunales laborales se ha regulado, en el orden jurisdiccional social, a través del proceso especial «de tutela de los derechos de libertad sindical» ([arts. 175 a 182 LPL](#)). Se trata de un proceso preferente, urgente y dotado de las máximas garantías procedimentales, si bien, en contrapartida, está sujeto a una importante limitación objetiva que lo restringe al exclusivo conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública de que se trate. En contrapartida, ello impide que esta modalidad especial pueda ser utilizada para conocer de otras cuestiones propias de la legalidad ordinaria, que se tramitarán por la vía ordinaria o especial que corresponda en cada caso.

En el caso que aquí se comenta se emplea la referida modalidad procesal de tutela para conocer de una lesión a la libertad sindical y a la garantía de indemnidad sufrida por el recurrente. Éste, afiliado a un sindicato, no pudo participar en una de sus reuniones, al haber sido sancionado previamente. Al entender que con ello se vulneraba su derecho fundamental de libertad sindical, presentó demanda ante el Juzgado de lo Social de Burgos, que estimó su pretensión y consideró que la actuación del presidente de la reunión al negarle la participación vulneraba efectivamente su derecho y anuló, por ello, la reunión. El sindicato, al entender la presentación de la referida demanda como una vulneración del contenido de los estatutos del sindicato, que obligaban a acudir a «cauces internos» para dirimir los conflictos entre aquél y sus afiliados, acordó sancionar al afiliado con la exclusión de la vida orgánica del sindicato y la separación de cargos electos de representación, así como la inhabilitación para ocuparlos por un período de seis años. Ello impidió al afiliado participar en la comisión para la elección de los próximos delegados sindicales, motivo por el cual impugnó ante la jurisdicción social, a través del proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, tanto la sanción impuesta como las comisiones celebradas y las decisiones acordadas en ellas. La sentencia de instancia, desestimatoria de la pretensión, fue recurrida en suplicación ante la Sala de lo social del TSJ de Castilla y León (Burgos), dando lugar a la sentencia aquí comentada.

II. La adecuación del procedimiento de tutela de los derechos fundamentales para el conocimiento de pretensiones lesivas de derechos fundamentales

La primera de las excepciones planteadas y resueltas por la Sala se refería a la adecuación del procedimiento especial de tutela de la libertad sindical seguido por el afiliado recurrente. Recuérdesse que la tutela de un derecho fundamental o libertad pública no tiene por qué obtenerse necesariamente a través de la modalidad procesal especial prevista por los [arts. 175 a 182 LPL](#), al tiempo que tampoco todos los procesos son adecuados para la protección de cualquier derecho fundamental¹. El afectado disfruta de un derecho de opción que le permite elegir entre tramitar su pretensión por la vía especial indicada, o hacerlo a través del procedimiento ordinario o especial que corresponda a la materia litigiosa. Ha de aclararse que el referido derecho de opción no le ofrece una discrecionalidad absoluta a la hora de elegir el procedimiento que crea más oportuno, pues es ésta una cuestión de orden público procesal que en modo alguno puede dejarse a la exclusiva voluntad de las partes. Por otra parte, no parece razonable hablar de opcionalidad cuando el objeto del proceso se restringe al debate sobre una posible lesión de un derecho fundamental o libertad pública, pues para conocer de este tipo de litigios el [art. 53.2 CE](#) prevé un proceso especial que es, precisamente, el de tutela². Repárese además en que el supuesto que aquí se analiza se centra en la impugnación de una conducta, en concreto la sanción impuesta por un sindicato a su afiliado, por ser ésta lesiva del derecho fundamental de libertad sindical y la garantía de indemnidad del actor. Éste fue, precisamente, el razonamiento que, en opinión de la Sala, permitía incluir el objeto de la demanda en la modalidad especial de tutela, ya que al actor, «mediante la sanción, se le privaba de participar en la elección de delegados»³ y tanto las elecciones sindicales como las candidaturas son elemento adicional del derecho a la libertad sindical⁴.

¹ Véase MANEIRO VÁZQUEZ, Y., *La tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas por los tribunales laborales* (Netbiblo, 2007), pgs. 88-89.

² Sobre esta cuestión, vid. GÁRATE CASTRO, J., *La tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas por los tribunales laborales (Un estudio de la modalidad procesal regulada por los arts. 175 y ss. de la Ley de Procedimiento Laboral)*, Revista Xurídica Galega (Pontevedra, 1999), pg. 74.

3 Fundamento jurídico decimoquinto.

4 Véase [SSTC 18/2001, de 29 enero](#)) y [18/2003, de 20 enero](#) , entre otras.

Así las cosas, el empleo del proceso de tutela en este caso no sólo es posible, sino incluso necesario, por ser el expresamente previsto por la Constitución y la LPL para resolver este tipo de controversias con el mayor número de garantías procesales⁵. Repárese, además, en que la decisión sobre la adecuación o no del procedimiento seguido es independiente de que se demuestre, finalmente, la efectiva vulneración del derecho fundamental o libertad pública, dado que la viabilidad de la pretensión ha de resolverse como cuestión de fondo y no como elemento determinante del procedimiento adecuado⁶.

5 Debe considerarse que la sumariedad típica del proceso de tutela configura un proceso en el cual sólo se conocerá de la existencia o no de una eventual vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, sin que, en términos generales, quepa conocer o decidir sobre cualquier otra cuestión de legalidad ordinaria, aun relacionada con la causa de pedir que haya dado origen al proceso ([art. 176 LPL](#)). Una vez realizada la elección y admitida la demanda por tutela de derechos fundamentales, el órgano judicial debe examinar, de oficio, si reúne los requisitos exigidos por los [arts. 175 y ss.](#) LPL o si, por el contrario, ha de remitirse a otro cauce procedimental distinto. En expresión del art. 177.4 LPL, el órgano judicial rechazará «de plano» las demandas «que no deban tramitarse con arreglo a las disposiciones de este capítulo».

6 [STSJ Galicia de 4 octubre 1999](#). Como indica GÁRATE CASTRO(*op. cit.* , pg. 74), aunque las causas de la inadecuación no tienen por qué ser exclusivamente formales, la sentencia que la declare sí habría de ser exclusivamente procesal, absteniéndose de entrar en el fondo del asunto. En el mismo sentido, véase [SAN de 18 octubre 2001](#).

Admitido el proceso de tutela como el adecuado para tramitar la pretensión, la Sala desestimó el supuesto incumplimiento del procedimiento previsto a nivel interno, por los estatutos del sindicato, para la impugnación de los acuerdos de éste. Una de sus principales características es el carácter urgente de su tramitación, también denominada «sumariedad cuantitativa», que se traduce en la reducción de los plazos procesales, así como en la supresión de determinados trámites capaces de dilatar la solución del pleito. Una de las consecuencias de esta urgencia es la posibilidad de presentar la demanda sin necesidad de acudir a los trámites previos de conciliación o reclamación administrativa ([arts. 64.1 y 70 LPL](#))⁷. Como indica la sentencia comentada, este mismo razonamiento debe aplicarse cuando la vía previa al proceso laboral aparezca determinada en los estatutos del sindicato⁸. Tal y como aquí sucedía, no se consideró preciso «agotar las vías sindicales previas, ni formular reclamaciones previas, ni la falta de agotamiento de vías internas puede suponer el incumplimiento de un deber estatutario, pues cuando se produce una vulneración de tal derecho fundamental a la libertad sindical, queda abierta la vía para el ejercicio de la correspondiente acción». Se indicó claramente, además, que si el actor no acudió a la vía interna y sí a la judicial «esta posibilidad estaba perfectamente reservada en nuestro Ordenamiento a cualquier ciudadano que considere vulnerado un derecho fundamental», especialmente cuando, como allí sucedía, esta lesión había sido ya reconocida judicialmente. Se insistió, además, en la adecuación del procedimiento seguido, ya que «lo que apareció vulnerado inicialmente fue un derecho fundamental del actor, que lógicamente sólo podría tener satisfacción a través de la vía judicial, toda vez que difícilmente podría acudir a vías internas de solución de conflicto», pues no podía hablar en la reunión del sindicato, ni estar presente en reuniones posteriores, al estar sancionado⁹. Como indicó la Sala, la sanción tiene su origen como consecuencia de la interposición de la demanda y, además, el inicio del expediente sancionador coincide en el tiempo con la presentación de la demanda y resolución en la sentencia de la reclamación del actor en defensa de su derecho fundamental. Es este el motivo por el cual no dudó en considerar la referida sanción como lesiva de la garantía de indemnidad, que impide que del ejercicio de los derechos por parte de los trabajadores puedan seguirse consecuencias perjudiciales para éstos, sin que las relaciones entre un sindicato y sus afiliados constituyan ninguna excepción.

7 Sobre esta cuestión, véase MANEIRO VÁZQUEZ, Y., *op. cit.* , pgs. 147 y ss.

8 Entre otras, véase [SSTSJ Madrid de 17 noviembre 2000](#), según la cual «siendo evidente que la exigencia de un requisito pre-jurisdiccional o de procedibilidad -siempre y cuando, obviamente, que no se asentara en unos firmes criterios de razonabilidad en su propia existencia, criterios que en el presente caso no comparecen- iría paladinamente en contra de ese principio constitucional de preferencia, que no deja de influir decisivamente en el principio procesal de celeridad».

9 Como indicó la Sala, «la sanción tiene su origen precisamente y como consecuencia de la interposición de la demanda, y además cronológicamente el inicio del expediente sancionador, es coetáneo en el tiempo a la interposición de la demanda y resolución en la sentencia de la reclamación del actor en defensa de su derecho fundamental», motivo por el cual no duda en considerar la sanción como lesiva de la garantía de indemnidad.

III . El «doble contenido» de la sentencia estimatoria dictada en el proceso de tutela

Una de las especialidades que identifican la modalidad procesal especial de tutela es, precisamente, el contenido de la sentencia estimatoria de la pretensión. Ésta incluirá, aparte de la declaración de nulidad de la conducta ilícita, un conjunto de medidas destinadas a detener o reparar los efectos lesivos que pudieran derivarse de ella. Es lo que se denomina «doble contenido», declarativo y de condena, de la sentencia¹⁰, al ser declarativo de la nulidad o nulidad radical de la conducta lesiva del derecho fundamental, y condenatorio al cese de la conducta lesiva, así como a la reposición de la situación al momento de producirse aquella y, si procede, la reparación de las consecuencias derivadas del acto lesivo ([art. 180 LPL](#)). Ahora bien, no toda sentencia estimatoria de la pretensión debe ordenar, inexcusablemente, el cese de la conducta ilícita y la indemnización de los daños que ésta hubiese ocasionado, sino que ha de ser el actor quien solicite expresamente en el suplico de su demanda la adopción de las citadas medidas, sin que pueda hacerlo en otro momento posterior como, por ejemplo, en la fase de conclusiones¹¹.

¹⁰ También denominado «contenido complejo» (véase GÁRATE CASTRO, J., *op. cit.*, pg. 136), o «doble naturaleza» de estas sentencias [entre otras, véase [Sentencias TS de 14 julio 1993](#) y [TSJ Cataluña de 12 junio 2002](#)].

¹¹ [STSJ Castilla y León \(Valladolid\) de 10 febrero 2003](#).

En el asunto concreto que aquí se comenta, además de la declaración de que la conducta impugnada lesionó su derecho de libertad sindical, se solicitaba la anulación de los congresos donde se acordó la expulsión del actor y donde fueron elegidos los delegados, así como que se anulase la propia elección de éstos. Al tiempo, se solicitaba una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de participar en el correspondiente congreso donde se realizó la elección de cargos de representación y de la imposibilidad para ejercer actividad sindical alguna durante el tiempo establecido en la sanción.

Frente a estas peticiones, la Sala de Burgos decidió, sin embargo, atender tan sólo a la última de ellas. No se anularon los congresos celebrados ni la elección de los representantes, pero sí se reconoció el derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios derivados de las anteriores conductas, estimados en la cantidad de 1.500 €, que la Sala consideró «adecuada al caso». El objetivo de esta indemnización no es otro que reparar «las consecuencias derivadas del acto» lesivo desde su adopción hasta la sentencia. Con ello se quiere indicar que la referida indemnización, aunque tenga un cierto componente sancionador o represor del comportamiento ilícito, no es automática y figura condicionada a que el solicitante acredite la verdadera existencia de los daños y perjuicios reclamados, o que aporte las bases o puntos de apoyo sobre los que ha de calcularse su importe¹². Los daños materiales son los perjuicios económicos que la conducta ilícita ocasiona al afectado. Éstos pueden venir definidos por la pérdida de una concreta cantidad de dinero (daño emergente), como sucede con las disminuciones salariales¹³, supresión de dietas¹⁴ o de algún complemento salarial, por los gastos ocasionados por la designación de letrado o, como aquí sucede, por «el gasto desembolsado por tener que asesorarse en el presente pleito». Esta última referencia merece una mención especial pues, como puede apreciarse, la Sala no exigió prueba de los daños y perjuicios materiales ocasionados por la conducta impugnada¹⁵, sino que, «por pura lógica», dedujo que, entre los perjuicios materiales que merecían ser indemnizados, había de encontrarse «necesariamente» el gasto desembolsado por el actor en concepto de asesoramiento legal. Este razonamiento, si bien se aparta de la exigencia general de prueba de los daños y perjuicios solicitados, no constituye una novedad, sino una tendencia habitual en las resoluciones de los Tribunales superiores de justicia el entender comprendidos los gastos de asistencia letrada como algo normal causado por el planteamiento del pleito¹⁶.

¹² En este sentido, véase [SSTS de 22 julio 1996](#), de [2 febrero 1998](#), [23 diciembre 2000](#) y [TSJ Madrid de 17 mayo 2004](#), entre otras.

¹³ [STS de 25 enero 2005](#).

¹⁴ [STSJ Madrid de 3 abril 2001](#).

¹⁵ Sobre esta cuestión, véase CARDENAL CARRO, M., [La indemnización en los procesos de tutela de la libertad sindical \(Un estudio jurisprudencial del razonamiento acerca de su pertinencia\)](#), Thomson-Aranzadi (Cizur Menor, 2006), pgs. 90 y ss.

¹⁶ Sobre esta cuestión, véase un completo análisis en CARDENAL CARRO, M. (*op. cit.*, pg. 241), pg. 250. Para el autor, «bastantes de esas expresiones conectan con algo tan obvio como que la obligación de acudir a la justicia es fruto del impedimento del pacífico disfrute de los derechos y no es infrecuente, además, que en esos fallos se contemple tal resarcimiento como daño moral, o como daño conjunto con los demás apreciados, lo que conecta con la idea de que se pretende resarcir la mera lesión, identificable con el impedimento de ejercer sin obstáculos el derecho que el ordenamiento jurídico concede».

La sentencia limitó exclusivamente al sindicato la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados, sin extenderla a ninguna otra persona física, aun cuando ésta apareciese como la responsable directa de la conducta impugnada. En el presente caso, se había ampliado la demanda para solicitar la responsabilidad solidaria del presidente de la reunión, al ser éste el sujeto que presentó la denuncia ante el propio sindicato contra el actor. La Sala fundamentó esta exclusión de la responsabilidad solidaria en el [art. 5.1 LOLS](#), el cual establece que el propio sindicato es el responsable de los actos y acuerdos adoptados por sus órganos en la esfera de sus competencias. Así pues, como la propia sentencia indicó, para poder condenar a la persona física es preciso que se acredite la existencia de extralimitación en sus competencias, algo que no había sucedido en este caso concreto, al haber intervenido el demandado en todo momento de acuerdo con las facultades conferidas por sus cargos directivos en el sindicato.